sus grados equivalentes y con la antigüedad que tengan en la fecha del traslado, siempre que llenen los requisitos de esta Ley.

ARTICULO 48. El Gobierno procederá, una vez sancionada la presente Ley, a conferir los grados navales que ésta establece, los que otorgará de preferencia al personal que actualmente presta sus servicios en la Armada con las correspondientes antigüedades. En consecuencia, los Escalafones de la Armada se iniciarán con este personal y los graduados en la antigua Escuela Naval, los que figurarán en el Escalafón de Reserva si no están en servicio activo.

PARAGRAFO 1° El personal que ingrese a la Armada después de vigente la presente Ley, para obtener los grados navales establecidos, deberá hacerlo de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

PARAGRAFO 2° Los médicos, abogados, ingenieros, odontólogos titulados, serán inscritos en el Escalafón con la antigüedad que determine la reglamentación que se expida en desarrollo de esta Ley.

PARAGRAFO 3° El personal de Sanidad y Comunicaciones deberá recibir la instrucción que determinen los Reglamentos en un hospital o enfermería naval y mediante pruebas de servicio en el mar se les conferirá el grado naval.

ARTICULO 49. El Gobierno conservará a los Oficiales de la Armada dentro del correspondiente Escalafón de actividad o de reserva, a fin de que los ascensos y llamamientos al servicio activo se hagan teniendo en cuenta su antigüedad y demás requisitos exigidos.

ARTICULO 50. La Armada tendrá un Comando Superior con su correspondiente Estado Mayor, integrado por Oficiales ejecutivos de Marina, dependerá de la Dirección General de Marina, y ésta del Ministerio de Guerra, y tendrá como Jefe un Oficial de alta graduación elegido por el Poder Ejecutivo de los que figuren en el Escalafón Naval o Militar.

ARTICULO 51. La Marina de Guerra tendrá dos bases navales principales: la de Cartagena en el Atlántico y la de Buenaventura en el Pacífico. Igualmente el Gobierno podrá crear las que juzgue necesarias para el buen servicio de la Armada Nacional.

ARTICULO 52. El Gobierno creará la Escuela Naval de Cadetes, para que cursen en ella los aspirantes a Oficiales Navales, y las demás Escuelas que juzgue necesarias para la formación de especialistas y para la preparación de personal de Clases y Marinería. El funcionamiento de tales institutos será reglamentado por el Poder Ejecutivo.

PARAGRAFO 1° Facúltase al Gobierno para contratar misiones técnicas extranjeras tanto para la enseñanza en las Escuelas Navales como en los barcos de la Armada.

PARAGRAFO 2° Facúltase al Gobierno para enviar a las Escuelas Navales y Armadas del Exterior a Oficiales de la Marina Nacional y personal de la misma que reúnan las condiciones que fije el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 53. El Gobierno reglamentará todo lo relativo al ramo de Oficiales instructores, cuando existan profesores de materias navales especializados y de humanidades, suficientemente preparados para ser incorporados al Cuerpo de Oficiales de la Armada.

ARTICULO 54. El personal de tropa y Suboficiales para la Infantería de Marina se tomará de los individuos reclutados para el servicio militar obligatorio.

ARTICULO 55. El Congreso votará anualmente y por separado la partida suficiente para atender al funcionamiento, conservación, desarrollo e impulso de la Marina: tal partida figurará dentro de los presupuestos del Ministerio de Guerra.

ARTICULO 56. El control sobre adquisiciones, consumo y reemplazo de materiales de máquinas, cubierta, artillería naval, torpedos, minas, boyas, faros, etc., etc., estará a cargo de una Sección de Material de Marina.

ARTICULO 57. El Jefe Supremo de la Armada es el Presidente de la República, quien para el mando y empleo de las fuerzas navales seguirá las normas que rigen para el Ejército.

ARTICULO 58. Para la dirección, organización, instrucción, administración y fiscalización de la Armada Nacional, el Ministerio de Guerra tendrá como órganos inmediatos una Dirección General de Marina y los Comandos Superiores de las fuerzas marítimas y fluviales.

ARTICULO 59. El uniforme y equipo de la Armada será reglamentado por el Gobierno. El uniforme, las prendas, insignias, etc., de la Armada sólo podrán ser usadas por el personal de la misma y su uso queda prohibido a los empleados de otras dependencias administrativas o particulares.

ARTICULO 60. Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

ARTICULO 61. Esta Ley regirá desde su promulgación.

Dada en Bogotá, a diez y seis de abril de mil novecientos treinta y seis.

El Presidente del Senado, ALEJANDRO GALVIS GALVIS—El Presidente de la Cámara de Representantes, ALFONSO ROMERO AGUIRRE—El Secretario del Senado, Rafael Campo A.—El Secretario de la Cámara de Representantes, Ernesto Daza Quijano.

Poder Ejecutivo—Bogotá abril 29 de 1936.

Publíquese y ejecútese,

ALFONSO LOPEZ

El Ministro de Guerra,

Benito HERNANDEZ B.

El Ministro de Obras Públicas,

César GARCIA ALVAREZ

El Ministro de Agricultura y Comercio,

Francisco RODRIGUEZ MOYA

LEY 106 DE 1936

(abril 29)

por la cual se ordena la construcción del hotel nacional de Barrancabermeja.

El Congreso de Colombia

decreta:

ARTICULO 1° Autorízase al Gobierno para que, si en su concepto y en vista del desarrollo que se proponga dar en el presente año a las obras portuarias de que trata el artículo 364 del Presupuesto Nacional para la vigencia fiscal en curso, no fuere indispensable invertir la totalidad de la suma apropiada para tales obras en el mencionado artículo, aplique la cantidad que juzgue necesaria a la pronta iniciación de los trabajos de construcción de un hotel nacional en Barrancabermeja, tomándola, para dicho efecto, de la partida señalada en la referida apropiación.

ARTICULO 2° Si en el curso del presente año no fuere posible el ejercicio de la autorización contenida en el artículo anterior, en el Presupuesto de la vigencia fiscal de 1937 se incluirá la partida necesaria para la construcción del mencionado hotel, al apropiar las sumas correspondientes a las obras portuarias de que trata el artículo 364 del Presupuesto de la actual vigencia fiscal, quedando comprendida tal construcción dentro de dichas obras.

ARTICULO 3° Esta Ley regirá desde su sanción.

Dada en Bogotá a diez y ocho de abril de mil novecientos treinta y seis.

El Presidente del Senado, ALEJANDRO GALVIS GALVIS—El Presidente de la Cámara de Representantes, ALFONSO ROMERO AGUIRRE—El Secretario del Senado, Rafael Campo A.—El Secretario de la Cámara de Representantes, Ernesto Daza Quijano.

Poder Ejecutivo—Bogotá abril 29 de 1936.

Publíquese y ejecútese,

ALFONSO LOPEZ

El Ministro de Obras Públicas,

César GARCIA ALVAREZ

LEY 107 DE 1936

(abril 30)

por la cual se provee al mejoramiento económico de las tierras, y se dan unas autorizaciones al Gobierno.

El Congreso de Colombia

decreta:

ARTICULO 1º Autorízase al Gobierno para estudiar las zonas del país susceptibles de ser regadas o desecadas económicamente.

ARTICULO 2º Si verificados los correspondientes estudios técnicos, el Gobierno Nacional encontrare comercial y socialmente favorable el establecimiento de riegos o desecación en determinadas zonas, podrá entrar a ejecutar las obras necesarias, ya sea por medio de contratos o por administración directa.

ARTICULO 3º Para la financiación de las obras, el Gobierno adoptará cualquiera o cualesquiera de las siguientes medidas:

a) Adquisición de las tierras mediante acuerdo amigable con los propietarios, y en cuanto esto no fuere posible expropiación de ellas a virtud de la declaratoria de utilidad pública que esta Ley confiere a tales obras; parcelación y venta de las tierras así adquiridas, en cuanto sea posible por conducto del Banco Agrícola Hipotecario, prefiriendo a aquellos dueños que acepten en tierras beneficiadas por el riego o la desecación el pago de la indemnización respectiva;

b) Fijación del impuesto directo de valorización, que podrá ser cubierto por anualidades o pagadero en terrenos, y que gravará todas las zonas beneficiadas;

c) Establecimiento de una tasa por metro cúbico de agua, que el Gobierno fijará al reglamentar esta Ley.

ARTICULO 4º El impuesto directo de valorización establecido por el artículo 3º de la Ley 25 de 1921 y de que trata el punto b) del artículo precedente, que cobrará el Gobierno, será equivalente al valor total de las obras ejecutadas, más un treinta por ciento (30 por 100) del beneficio que los terrenos desecados o regados recibieren una vez construidas dichas obras, y se repartirá en forma proporcional al beneficio que las tierras obtuvieren.

ARTICULO 5º La tasación de este impuesto se hará sobre catastros especiales de las propiedades que han de beneficiarse, y teniendo en cuenta: su valor antes de la ejecución de las obras que se proyecten y el mayor valor que reporten de las susodichas obras.

ARTICULO 6º Los avalúos de los terrenos se harán por peritos nombrados tanto antes como después de que las obras se ejecuten, en la forma siguiente: uno por el Gobierno Nacional, otro por la Junta de propietarios interesados y un tercero por los dos peritos así nombrados.

ARTICULO 7º El Gobierno procederá a cobrar el impuesto de valorización tan pronto como se ejecuten las obras y se haga notorio el beneficio y a fijar los plazos

en que deba cubrirse el impuesto, pudiendo recibir tierras en pago o haciéndolo efectivo en dinero.

ARTICULO 8º Los terrenos que el Gobierno recibiere en pago del impuesto serán parcelados por conducto del Banco Agrícola Hipotecario o de otra institución similar, en porciones no mayores de veinticinco hectáreas.

ARTICULO 9º Facúltase al Gobierno para contratar empréstitos con destino a la ejecución de las obras para regadío y desecación de tierras, dando como garantía el impuesto de valorización, y para abrir los créditos administrativos indispensables para el cumplimiento de esta Ley.

ARTICULO 10. En los Presupuestos de las próximas vigencias se incluirá la partida de cuatrocientos mil pesos (\$ 400,000) para iniciar el cumplimiento de la presente Ley.

ARTICULO 11. En las obras de desecación que se emprendan en las adyacencias de las lagunas serán respetadas éstas, de manera que el caudal de sus aguas no sea disminuido en forma inconveniente para la economía nacional y el aprovisionamiento de aguas potables para las ciudades vecinas a los pequeños lagos.

Dada en Bogotá, a diez y seis de abril de mil novecientos treinta y seis.

El Presidente del Senado, ALEJANDRO GALVIS GALVIS—El Presidente de la Cámara de Representantes, ALFONSO ROMERO AGUIRRE—El Secretario del Senado, Rafael Campo A.—El Secretario de la Cámara de Representantes, Ernesto Daza Quijano.

Poder Ejecutivo—Bogotá abril 30 de 1936.

Publíquese y ejecútese,

ALFONSO LOPEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Gonzalo RESTREPO

El Ministro de Guerra, encargado del Despacho de Industrias y Trabajo,

Benito HERNANDEZ B.

El Ministro de Agricultura y Comercio,

Francisco RODRIGUEZ MOYA

LEY 108 DE 1936

(mayo 8)

por la cual se dispone la manera como han de distribuirse los auxilios nacionales que se destinan a los establecimientos de asistencia pública y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

decreta:

ARTICULO 1º En adelante, los auxilios destinados a la asistencia pública, en el Presupuesto Nacional, se distribuirán de acuerdo con el censo de población aprobado, de cada Departamento, a excepción de las Intendencias y Comisarias que tendrán sus partidas determinadas de acuerdo con sus necesidades.

PARAGRAFO. La distribución de las partidas globales que el Gobierno Nacional entregará al respectivo Gobernador, Intendente o Comisario, las harán estos funcionarios asesorados por la Junta Departamental de Higiene y Asistencia Pública o por la primera autoridad sanitaria si no existieren aquéllas.

ARTICULO 2º Las Instituciones de Utilidad Común que se dediquen a la Asistencia Pública o a Campañas Sanitarias y de Higiene y que reciban auxilios del Tesoro Público, quedarán sometidas a las normas que dicte el Gobierno Nacional.

ARTICULO 3º Autorízase al Gobierno Nacional para vender sin sujeción a los requisitos del Código Fiscal los